

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.
En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 209

FECHA: 26 de Enero de 2015

SUMARIO

PAÍS	CONTENIDO	NºPG.
BOLIVIA	EVO MORALES: "ESTAMOS DISPUESTOS A DIALOGAR CON EEUU Y A REPONER EMBAJADAS"	2
COLOMBIA	UN ESPAÑOL EMPEÑADO EN LA PAZ	2
GUATEMALA	"AQUÍ ESTAMOS NUEVAMENTE. NO SOMOS CRIMINALES, NI DELINCIENTES"	4
	90 AÑOS DE CÁRCEL A GARCÍA ARRENDONDO POR LA QUEMA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA	5
HAITÍ	HAITÍ ENTRA A FASE DE INCERTIDUMBRE POLÍTICA TRAS DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO	6
	HAITÍ, 5 AÑOS DESPUÉS	7
HONDURAS	"LA POLICÍA DE HONDURAS NO ES DE JUAN ORLANDO, SINO DEL PUEBLO" DICEN LÍDERES DE OPOSICIÓN	12
MÉXICO	ALCALDE ACUSADO POR LAS DESAPARICIONES DE ESTUDIANTES EN MÉXICO; FAMILIAS EMPRENDEN BÚSQUEDA COMUNITARIA EN EQUIPOS	13
PANAMÁ	CORTE IDH CONDENA A PANAMÁ POR VIOLACIONES TERRITORIALES A LOS PUEBLOS GUNA Y EMBERÁ	14
VENEZUELA	LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO	15
	LA OPOSICIÓN FIRMA LA TREGUA	16

BOLIVIA

EVO MORALES: “ESTAMOS DISPUESTOS A DIALOGAR CON EEUU Y A REPONER EMBAJADAS”

A tiempo de saludar la voluntad política del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de enviar una comisión especial que esté presente en su la posesión de su tercer mandato, el Jefe de Estado Evo Morales aseguró ayer que Bolivia está abierta para dialogar con ese país y reponer las respectivas embajadas diplomáticas, todo ello en el marco del respeto.

“Estamos haciendo gestiones de un encuentro de alto nivel y además de eso tenemos muchos deseos de cómo reponer nuestros embajadores. Lo único que pedimos que haya respeto. Entonces si bien hay un mensaje vamos a evaluar, vamos a analizar frente a este mensaje del presidente Obama de enviar una comisión de alto nivel (a la posesión)”, dijo.

Actualmente las relaciones entre ambos países están reducidas al nivel de encargados de negocios. En 2008 Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Golberg por injerencia política en el país. En respuesta el embajador boliviano Gustavo Guzmán fue también expulsado de territorio norteamericano.

Los avances para consolidar un encuentro de alto nivel entre ambos países se los realiza desde antes que EEUU comunicara que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, aseveró Morales en conferencia de prensa brindada desde la Residencia Presidencial en La Paz.

Este 21 y 22 Morales será posesionado por tercer mandato consecutivo como Presidente del Estado Plurinacional luego de ser reelegido democráticamente por más del 61,3% de la ciudadanía. Los actos se realizarán en Tihuanacu (el 21) y al día siguiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fuente: Nodal

COLOMBIA

Enrique Santiago es nuestro compañero de la Plataforma Justicia por Colombia, a la cual pertenece el Comité Óscar Romero de Madrid.

Nos sentimos orgullosos de su incansable trabajo por la Paz en Colombia y por su compromiso constante acompañando al pueblo colombiano.

UN ESPAÑOL EMPEÑADO EN LA PAZ



Enrique Santiago, en su despacho de Madrid.

Enrique Santiago asesora en la negociación entre Colombia y las FARC

Además de dirigente de Izquierda Unida y reconocido abogado, Enrique Santiago es el único español que participa en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una negociación que busca poner fin a un conflicto que se prolonga desde hace más de cinco décadas y que se ha cobrado 300.000 muertos, 55.000 desaparecidos y más de seis millones de desplazados internos.

Santiago no representa a España, participa en las conversaciones a instancias de Noruega, país garante del proceso junto a Cuba. Los noruegos son expertos en este tipo de mediaciones; su último éxito se ha producido en Filipinas, con la firma de la paz entre el Ejecutivo de Manila y el Frente Moro. En el caso de Colombia, Oslo ha querido contar con el abogado español para que asesore sobre los asuntos legales que rodean el fin del conflicto, en concreto sobre los aspectos que afectan a la administración de justicia, el derecho internacional y el derecho humanitario. En estos campos debe velar porque todos y cada uno de los acuerdos encajen tanto con el ordenamiento jurídico colombiano como con el internacional.

En los más de dos años en los que las partes llevan reuniéndose en La Habana, el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC han alcanzado acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda que se estableció para las conversaciones. Los temas resueltos responden a asuntos políticos, la reforma agraria, la participación en la actividad política de la guerrilla y la sustitución de los cultivos de coca.

Resta por tratar los asuntos jurídicos. El más importante radica en qué medida se llevará a cabo la rendición de cuentas ante la justicia de todos los implicados en el conflicto, entre los que se incluyen políticos, militares, guerrilleros y paramilitares. El objetivo a alcanzar, afirma el abogado español, «es garantizar la reparación a las víctimas a la vez que se garantiza que lo ocurrido no vuelva a suceder». En este punto De Santiago advierte sobre un precedente dramático, el asesinato a partir de 1985 por los paramilitares de hasta 6.000 militantes de la Unión Patriótica, un partido impulsado por las FARC. Ahora, uno de los puntos en los que la guerrilla insiste más es la garantía de la seguridad para sus representantes en el escenario del postconflicto. Y para que un caso como el de la Unión Patriótica no se vuelva a producir, el abogado apunta la imperiosa necesidad de la desaparición total de los paramilitares, una presencia que podría amenazar la salida negociada al conflicto, «la única viable como han demostrado cinco décadas de enfrentamientos».

Ausencia de España

El abogado se reconoce desilusionado por la ausencia del Gobierno español en La Habana, sobre todo porque en ocasiones anteriores fue uno de los actores principales en las negociaciones. Santiago desconoce si el Ejecutivo se ofreció a mediar entre las partes aunque señala que la inclusión en 2003, cuando gobernaba José María Aznar, de las FARC en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea ha significado un veto a cualquier presencia española en el proceso. Opina que, de la misma manera que Aznar abanderó a instancias de Álvaro Uribe aquella decisión de hace doce años, ahora, en un escenario como el actual, Mariano Rajoy debería de dar los pasos contrarios para hacer que Bruselas reconsidere la situación de las FARC como muestra de apoyo al proceso de paz.

Al margen de gestos políticos, el abogado recuerda que una Colombia sin la losa de la guerra se convertirá en una potencia emergente de primer nivel y señala que muchos países ya se están posicionando ante esta posibilidad para abrir mercado en el país latinoamericano.

El presente es ya el cuarto proceso de paz que Gobierno y guerrilla inician desde 1984. Con toda la cautela que exige una negociación que busca poner fin a cinco décadas de guerra, Santiago se muestra relativamente optimista respecto al desenlace. «Por ahora las cosas van bien encauzadas», afirma antes de reconocer una voluntad tanto en el Gobierno de Santos como de las FARC para que esta vez sea la definitiva. En cualquier caso, advierte de que resta por delante un camino largo y difícil por recorrer. Y es que «la paz no se firma con los amigos, se firma con los enemigos», subraya Santiago.

ÓSCAR CHAMORRO

GUATEMALA

“AQUÍ ESTAMOS NUEVAMENTE. NO SOMOS CRIMINALES, NI DELINCIENTES”

“Aquí estamos nuevamente. No somos organizaciones criminales, ni delincuentes, como se nos acusa. Somos campesinos e indígenas trabajadores que defendemos nuestros ríos y nuestros derechos. ¡Libertad para Fausto Sánchez! ¡Que pare la persecución en contra de Raúl Maldonado, Rocael López y Talco Clemente!, eran algunas de las consignas que irrumpieron en las calles de San Pablo, cabecera del Municipio del mismo nombre, en el Departamento de San Marcos, a unos 300 Km al suroccidente de la ciudad capital de Guatemala.

El 10 de enero, a un mes del secuestro y encarcelamiento Fausto Sánchez, dirigente del Frente de Resistencia Nacional en Defensa de los Recursos Naturales y de los Derechos de los Pueblos (FRENA), campesinos e indígenas integrantes de dicha organización, en compañía de representantes de otras organizaciones nacionales como el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), en horas de la mañana, realizaron una caminata pacífica de 3 Km, hasta el pueblo de San Pablo, exigiendo la libertad para sus dirigentes secuestrados/encarcelados y perseguidos por el Estado de Guatemala.

En el Departamento de San Marco, FRENA inició la inédita resistencia pacífica por la nacionalización del servicio de la distribución de la energía eléctrica desde hace 15 años atrás. Desde entonces, comunidades enteras de usuarios, ante las sobrefacturaciones y cobros arbitrarios por parte de la empresa ENERGUATE-ACTIS, dejaron de pagar las facturas de manera organizada. Pero la situación social se convulsionó aún más en el Municipio cuando el Ministerio de Energía y Minas, en 2011, sin consultar a la población afectada, adjudicó a la empresa Hidro Salá, del Consorcio FABRIGAS, la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Salá que alimenta a las comunidades del Municipio de San Pablo.

Ante la presencia abusiva de estas empresas del sector eléctrico, y la persistente violación de derechos por parte de la empresa minera Marlín (la canadiense Goldcorp) en el área, indígenas y campesinos empobrecidos y contaminados decidieron organizarse para resistir y defender sus derechos, conforme a lo establecido en el ordenamiento interno. Pero el Estado activó su sistemática política nacional de “seguridad interna”, acusando a los peones de los monocultivos, ahora, organizados, de “enemigos internos” del Estado y del desarrollo. Y, en coordinación con las empresas privadas “afectadas” por la resistencia social, persigue, secuestra y encarcela a todos los tábanos (dirigentes) que se atreven a despertar a estas comunidades dormidas en el atraso y el abandono estatal.

Ocurrió el 10 de diciembre pasado. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), aplicando una táctica militar antisubversiva, irrumpieron, antes que amaneciese el día, en el domicilio de Fausto Sánchez, y lo capturaron. Otros tres dirigentes, también perseguidos por el Estado-empresas extranjeras, se declararon en clandestinidad. Inmediatamente la población salió a las calles en protesta. Pero la recargada PNC militarizada reprimió, persiguió y capturó a 8 manifestantes, incluido menores de edad. Don Fausto fue detenido, e inmediatamente se presentaron en el Juzgado representantes legales de ENERGUATE-ACTIS, HIDRO SALÁ y el Alcalde Municipal de San Pablo, como querellantes adhesivos, y ligaron a proceso penal al dirigente comunitario por el delito de organización criminal.

La Agente de PCN, De León Aguilar, quien, junto a sus otros 80 compañeros, protege el edificio vacío de la Municipalidad de San Pablo, ante la presencia de indígenas y campesinos en el frontis, sin poder disimular su preocupación nos dice: “Lo que pasa que aquí, comunidades enteras ya no pagan energía eléctrica. Y la empresa, para ir a recoger sus cables, pide que la PNC los acompañe para que no sean agredidos en las comunidades. (...) Ellos son muy violentos. En el bochinche (manifestación) último, quemaron llantas, hasta nos quitaron nuestras armas, (...)”.

En la protesta social las y los empobrecidos, excluidos y contaminados únicamente llevaban pancartas y algunas mantas con citas bíblicas. Eso sí, quienes tomaban el micrófono tenían las ideas claras sobre sus derechos y las obligaciones de los agentes de la PNC para con la ciudadanía.

De esta manera, la persecución y judicialización de la protesta social, lejos de intimidar a los sectores empobrecidos, los afianza y articula en sus luchas sociales. Católicos y evangélicos, que en las actividades religiosas se excluyen mutuamente, se reúnen en las luchas sociales. Y así estas luchas sociales se proyectan como imaginaciones trascendentales porque cuentan con una mística y una espiritualidad para la liberación integral.

Fuente: Ollantay Itzamná. Rebelión

90 AÑOS DE CÁRCEL A GARCÍA ARRENDONDO POR LA QUEMA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA

El ex jefe policial Pedro García Arredondo fue sentenciado a 90 años de cárcel al ser declarado culpable este 19 de enero, por la quema de la embajada de España el 31 de enero de 1980. Incendio en el que murieron 37 personas y sobrevivieron dos.

34 años después la justicia guatemalteca nos da un respiro. Esta noticia debería estar como titular en la primera plana de los medios de comunicación oficiales, pero apenas dedicaron una línea y en letras pequeñas. No asombra, ya que el ex jefe policial actuó acatando órdenes superiores. Ya sabemos lo que eso significa.

Con la noticia en capilla ardiente están los genocidas que esperan –ahuevados- a que llegue su turno de enfrentar la justicia, el pasado se les hace presente y viene con toda la dignidad de las vidas truncadas que ellos arrebataron, obedientes al capitalismo estadounidense y a su avaricia de poder y dinero. De las entrañas de la tierra en las fosas clandestinas, desde las cunetas, en los barrancos, desde los muros y las banquetas, desde la boca de los volcanes y las aguas de los mares se escucha el eco de los que desde la mancilla de la historia oficial exigen justicia. No marchan, vienen caminando hacia la justicia a exigirle que pague los culpables. No son espectros de historia popular, son las almas de los que soñaron con una Guatemala justa, digna y libre.

Esta noticia llega en un momento crucial ya que el genocida Ríos Montt y su ejército de abogados, con el apoyo de la oligarquía y el gobierno corrupto, en un sistema de justicia igual de corrompido, tratan a toda marcha de detener el juicio por genocidio del que lo sabe el mundo entero, ya fue declarado culpable en mayo de 2013, sentenciándolo a 80 años de cárcel. Como también lo sabe el mundo entero, el lado impune del sistema de justicia desestimó la sentencia días después.

Así como Arredondo tendrá que pagar, Ríos Montt al igual que en su momento lo hará Otto Pérez Molina y su banda que está regada -como boñiga- en todos los rincones del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Para ser exactos está regada en todas las calles de Guatemala, porque tiene ojitos y orejas por doquier. Para ser puntuales, está por aire, mar y tierra. Esta dictadura para nada silenciosa y muy bien orquestada por la oligarquía y arribistas que prefieren la traición a la honestidad.

En Guatemala el sistema de justicia nos da puñaladas por la espalda constantemente, y quién quita y esta sentencia solo sea una burla más de los togados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad que saldrán más adelante con sus once ovejas..., esperemos que no. Aunque si se ve con claridad García Arredondo es tan solo un subalterno, de los que muy bien sacrifican los de la poltrona.

El tiempo pasa volando, escucho decir. En este caso cuando se busca justicia el tiempo se detiene y la impunidad lo ahoga, yo pertenezco a la generación de las desmemoria, tenía meses de nacida cuando sucedió lo de la quema de la embajada de España y fue hasta hace unos años que me enteré, así como yo hay miles de guatemaltecos a quienes la historia oficial se encarga de crearles una amnesia inducida, que se vuelve colectiva.

Viendo desde otra perspectiva aunque la noticia la pusieran en vallas gigantes como los anuncios los publicitarios o de propaganda electoral, en las calles principales de la ciudad, el pueblo no se percataría porque nos han educado para no indagar y no tener capacidad de reacción. Ahí andan los buses públicos con sus pancartas de que sí hubo genocidio, el pueblo al contrario dice, “ordene mi general” porque los medios les han dicho que Guatemala era distinta en tiempos de Río Montt, que

había justicia, -limpieza social y genocidio- y que los ladrones no existían –los comunes, los oligarcas desde siempre han estado ahí- no asombra entonces que los pocos ciudadanos comunes que se atrevan a comentar respecto al juicio por genocidio lo hagan felicitando a Ríos Montt, por los tiempos de “gloria” en Guatemala.

Nos enseñan a confundir la magnesia con la gimnasia. Y así vienen creciendo las nuevas generaciones bajo el bombardeo constante de la oligarquía capitalista que no nos deja respirar.

En este momento pienso en mis mayores que vivieron plenamente los tiempos oscuros de la Guatemala ensangrentada a bala de metralla del ejército. Y admiro a aquellos que aún cansados por el peso de la injusticia y la impunidad, han seguido ahí nadando contra la corriente, negándose a olvidar y a traicionar la memoria, la sangre y la matriz que es la tierra misma. Los que hacen de la memoria histórica la semilla fértil que intenta germinar en las generaciones que vienen emergiendo entre la podredumbre de un país por demás acribillado. Sea esta sentencia entonces la ilusión de que a pesar de los pesares en Guatemala todavía se puede creer una pizca en la justicia. Ojalá llegue el día en que los guatemaltecos veamos a los verdaderos cabecillas del horror del genocidio, sentados en el banquillo escuchando sus sentencias que los vuelva carroña en las mazmorras.

La esperanza es la última que muere –dicen- pero es que aparte de su resistencia también es hermosa, de aquel verde encendido que enamora la vida y a los vástagos los hace florear. Sea esta entonces la sentencia de la esperanza. Salú por los mártires que son nuestra luz de candil y por los que honran la vida.

Fuente: Ilka Oliva Corado. Rebelión

HAITÍ

HAITÍ ENTRA A FASE DE INCERTIDUMBRE POLÍTICA TRAS DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO

El Parlamento haitiano fue disuelto el martes tras el fracaso de negociaciones de última hora para alcanzar un acuerdo que extendiera los mandatos de sus miembros para evitar una crisis política en el país caribeño.

Haití no ha celebrado elecciones legislativas ni municipales desde hace tres años y la ausencia de un Parlamento operativo hace que, en la práctica, el presidente Michel Martelly tenga que gobernar por decreto.

Martelly inició negociaciones de último minuto, pero no logró convencer a un grupo de senadores de oposición a que aprobaran un plan sancionado por Estados Unidos para extender los mandatos parlamentarios por varios meses hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones.

El martes, el "Grupo Central" de Naciones Unidas -que incluye a países que trabajan estrechamente con Haití, como Estados Unidos, Brasil, Canadá y la Unión Europea-, emitió un comunicado diciendo que "deplora el hecho de que el Parlamento haitiano se haya vuelto disfuncional" y manifestó su apoyo a Martelly.

"En estas circunstancias excepcionales, el 'Grupo Central' confía en que el ejecutivo y todos los actores políticos actuarán con responsabilidad y contención", agregó.

Martelly, cuyo mandato termina el próximo año, intentó calmar a críticos de la oposición el mes pasado al designar al ex alcalde de Puerto Príncipe Evans Paul como nuevo primer ministro, pero el Parlamento rechazó su elección y se rehusó a ratificarlo.

"Esperaba ser invitado al Parlamento. No sucedió, pero no fui yo el que se rehusó a presentarse", declaró Paul en una entrevista. Ahora, como primer ministro de facto, dijo que aún planea formar un nuevo Gobierno.

"He iniciado consultas con partidos políticos para componer mi Gobierno, pero no es fácil lograr un consenso", comentó.

Durante semanas, opositores a Martelly han realizado protestas callejeras en la capital y han acusado al presidente y a su familia de corrupción. Las manifestaciones han adquirido un tono más agresivo en los últimos días y algunos manifestantes están llamando a una guerra civil.

El lunes fue el quinto aniversario de un devastador terremoto que mató a decenas de miles de personas en Puerto Príncipe. Muchos haitianos aún están sin hogar.

El domingo, cuando aún se sostenían negociaciones, la embajada de Estados Unidos en Haití emitió un comunicado para manifestar su respaldo a Martelly.

No está claro cuándo se podrán celebrar nuevas elecciones legislativas y municipales.

El martes, la ONU llamó a todas las partes a "organizar, tan pronto como sea técnicamente factible, elecciones inclusivas, justas, transparentes y equitativas en el 2015".

Haití tiene contemplado celebrar elecciones presidenciales a fin de año.

Fuente: David Adams. Reuters

HAITÍ, 5 AÑOS DESPUÉS

Azotado de manera brutal por un sismo de 7.3 grados Richter en 2010, Haití ha vivido en la miseria en los últimos cinco años. Y aunque las políticas asistencialistas y las donaciones acudieron en tropel a proporcionar ayuda a los damnificados, los fondos han sido desviados para la construcción de hoteles de lujo, mientras el país sigue inmerso en la pobreza. Ante la imposibilidad de celebrar comicios electorales y de aprobar la relacionada ley electoral en el congreso, en 2014, la crisis política, que culminó con la renuncia del Primer Ministro Laurent Lamothe, tuvo como desenlace una oleada de manifestaciones populares y decenas de detenidos políticos. El presidente Michel Martelly "suspendió" el parlamento el 13 de enero y ahora tiene la posibilidad de gobernar por decreto.

I- 2010-2015, donaciones, promesas y cólera

2010. Claire viste una camisa blanca elegante, un limpio pantalón de mezclilla y tenis nuevos para largos recorridos. Salió de prisa, con paso firme. Brilla en medio de los escombros. Va trotando cuesta arriba, evitando cúmulos de ladrillos, coladeras destapadas y postes metálicos acostados sobre la banqueta. Harta de vagabundear, se sienta en el borde de una imponente roca que invade el carril y dificulta el tráfico. A lo largo de la Rue Delmas todo el mundo jadea, el sol parece no separarse nunca de su cenit y la línea del termómetro no se despega de los 30 grados. El esmog de la urbe caribeña se mezcla con el polvo de la destrucción y un hormiguero humano, desesperanzado, va en busca de comida y motivos para no pensar en la tragedia.

Han pasado dos semanas del terremoto, de la tremenda sacudida que en 39 segundos mató a 250 mil personas en la capital de Haití, Port-au-Prince o pap, como le dicen aquí. El 12 de enero, día de la catástrofe, Claire estaba fuera de su casa y se salvó. A su primo, a su tía y a muchos vecinos no les tocó la misma suerte. Ella todavía tiene una casa y una madre. Un millón y medio de sus conciudadanos, en cambio, duerme en las calles, en los jardines públicos o debajo de una carpa colectiva en los más de mil campos de emergencia que los albergan. El más grande —Delmas, un ex club de golf— lo presiden los militares estadounidenses y la organización Catholic Relief Service. Hay tan sólo unas decenas de baños y regaderas para 60 mil personas.

Claire tiene hambre. Su mamá no ha regresado en varios días. Todo producto básico se ha vuelto escaso, un lujo. Sólo quien logra tener un lugar en los campos puede acceder a raciones de arroz y frijoles que se entregan a cada grupo de 15 personas, más o menos el número de huéspedes que caben en una carpa. Los "excluidos" se las arreglan, buscan trabajos efímeros, intercambian baratijas o piden limosna, pero ¿a quién? La chica observa a los transeúntes, se esconde detrás de la roca, que en realidad es lo que queda del segundo piso de una construcción. Posiblemente Claire esté esperando a algún blanc, un extranjero a quien hablar y pedir ayuda. Me sigue. Después de 30, 40, 50 pasos acelerados, me rebasa. Pregunta, la mirada agachada, el tono de la voz seguro. Tomamos agua, la comida debe de estar lista y la invito a acompañarme.

¿Adónde fue el dinero?

Después del terremoto, empezó una hipócrita competencia de solidaridades y donaciones. ¿Quién daría más? La Organización de las Naciones Unidas (ONU), gobiernos, empresas, ciudadanos, sitios web, asociaciones y las más de diez mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG) presentes en el país vertieron una masa de promesas y buenas intenciones, estimadas en cerca de 11 billones de dólares. Después de un año, sólo 5% de éstas había sido presupuestado y la verdadera competencia se dio, entonces, para ganar las licitaciones de las obras. La gestión de ese dinero fue otorgada a la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), bajo el mando del ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el primer ministro haitiano, un puesto que quedó vacante por más de un año, tras la crisis política que caracterizó el gobierno del presidente-cantante Michel Martelly, a partir de mediados de 2011.

Por tanto, es fácil entender quién manda en realidad sobre el uso de las donaciones. Pese al flujo de dinero prometido, los trabajos para remover o reciclar los escombros (unos diez millones de detritos que sepultaban la capital) tardaron más de cuatro años en efectuarse. En los primeros dos años de “reconstrucción”, no hubo prácticamente ningún avance, la ciudad estaba igual, como a principios de 2010.

El entonces mandatario René Préval, quien dirigía su gabinete desde una carpa, tuvo que entregar las llaves del país a un consorcio de bancos y gobiernos foráneos que velarían por su destino. Hoy, más del 80% de los escombros ha sido eliminados, pero los esfuerzos de reconstrucción se han orientado más a la edificación de lujosos hoteles, maquiladoras y fábricas textiles que benefician más a inversores y compañías extranjeras que a resolver las necesidades de la población.

Entre 2010 y 2012, los fondos de la comunidad internacional para Haití alcanzaron la cifra de 6.43 billones de dólares, pero sólo el 9% pasó, de alguna forma, por el gobierno local. El monto de los contratos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue de 485.5 millones de dólares, de los que sólo 1.2% fue para empresas haitianas.

En 2012, cuando aún medio millón de personas vivía en las carpas, el “fondo humanitario” de los ex presidentes Clinton y George W. Bush invirtió dos millones de dólares en el hotel de cinco estrellas Royal Oasis, un enclave dentro de un área urbana asolada. Un año después, con 300 mil desalojados todavía en la capital, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del grupo del Banco Mundial, optó por financiar un nuevo Hotel Marriott que generaría “hasta” 200 empleos a partir de 2015 y 300 para su construcción.

La estructura estará en buena compañía: la estadounidense Best Western y la española Occidental Hotels & Resorts “resurgirán” de los detritos por el bienestar turístico de la isla, también gracias a los fondos de la solidaridad internacional y a los beneficios fiscales inusuales que tienen en los primeros 15 años de actividad. Los mecanismos de la cooperación y una rebanada de las donaciones sirven como engranajes para la apertura de nuevos mercados, atractivos para las transnacionales y para algunas firmas de la élite nacional.

Neoesclavitud y cólera

“Haití tiene las condiciones fundamentales para un crecimiento económico sostenido, incluyendo una fuerza laboral competitiva, la proximidad de grandes mercados y atractivos turísticos y culturales únicos”, según Ary Naim, representante de la IFC en el país caribeño. Su frase sonaría cínica para muchos haitianos, ya que una situación laboral “competitiva” significa, para muchos de ellos, sweatshops, o sea “fábricas miserables” —implantadas por inversionistas estadounidenses— poco proclives a respetar las normas sobre el salario mínimo nacional de cuatro dólares y medio (ya de por sí muy bajo) y en las que trabajan bajo un régimen de sobreexplotación.

Otra paradoja de la cooperación, ligada también a la presencia militar extranjera en Haití, tiene que ver con la terrible epidemia de cólera que azota el país desde hace cuatro años y medio. Un estudio de 2011, publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, estableció que el cólera, desaparecido de Haití hace 150 años, fue reintroducido por el contingente nepalés de los Cascos Azules, desplegado tras el sismo de 2010 dentro de la Minustah, la controvertida misión de paz de Naciones Unidas. Sin embargo, la ONU

tardó 813 días en reconocer su implicación en la difusión de la epidemia y en pedir disculpas. Hoy se cuentan nueve mil muertos y 750 mil contagios y erradicar el cólera costará 2.2 billones de dólares.

En 2014 y 2015, con cerca de 140 mil personas todavía dispersas en 243 campos, la inversión internacional no apunta a la construcción de vivienda, sino a los proyectos hoteleros y a la expropiación y privatización de las costas e islas haitianas, como en el caso de la Île à Vache. Este pequeño paraíso del suroeste se ha vuelto el objetivo de empresarios estadounidenses y dominicanos, entre otros. El Colectivo de Campesinos de Île-à-Vache (KOPI), fundado en 2013, lucha para defender a los pobladores de la emigración forzada, de la expulsión de sus propias tierras y de la crisis alimentaria y ambiental que los nuevos megaproyectos turísticos están acarreado: deforestación, reducción de los cultivos y 20 mil habitantes alejados por la fuerza policiaca de las “brigadas motorizadas”, a cambio de la promesa de dos mil empleos, auspiciados por los operadores turísticos en la región, y mil 500 residencias que ocuparán enteramente las costas.

El Colectivo no es contrario al turismo, sino que combate los efectos nefastos de los proyectos que afectan a las comunidades locales, obligándolas a migrar hacia las ciudades y a trabajar en las fábricas miserables.

Flashback

2010. Claire mira a su alrededor, curiosa. Su francés es claro, no utiliza casi el criollo, idioma que yo no entendería, de todos modos. Estamos frente a la casona sede de Aumohd, la asociación de abogados para la defensa de derechos humanos en Haití que me da hospedaje. Su presidente, Evel Fanfan, es incansable; trabaja con presos políticos y sindicatos. La hora de la comida en Aumohd es un ritual. Los que dormimos en la casa preparamos diariamente una cantidad de alimentos para 15 000 personas: arroz, chicharos, frijoles, cebollas, salsas de pescado molido y cuscús, que aquí llaman Pití Mí (Pequeño Yo) y pastas que traje de México. Claire come doble, ríe y se lleva una porción para su mamá, en caso de que regrese pronto. Au revoir, se despide; no vuelve jamás.

El hambre de Haití

En la actualidad 80% de los diez millones de haitianos vive en la pobreza. Un millón y medio padece hambre y seis millones 700 mil no satisfacen con regularidad sus necesidades alimentarias. Una quinta parte de los niños padece desnutrición. La culpa no es del terremoto o del cólera. La “industria del hambre” ha sido históricamente un gran negocio: se crean mercados cooptados en los países “asistidos” mientras que, en Estados Unidos, los productores subvencionados participan en los programas de ayuda y venden al gobierno sus cosechas. Éste, a su vez, las entrega a diversas ONG y asociaciones que incluso pueden fungir como intermediarios y revenderlas, generando efectivo para sus operaciones.

En los ochenta, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Estados Unidos presionaron a Haití para que fijara los aranceles más bajos a la importación de productos agrícolas del Caribe, lo cual perjudicó el agro nacional. Tras el sismo, ríos de alimentos inundaron Port-au-Prince, afectando nuevamente la producción nacional. Cinco años después, los escombros de Haití quedan ahí, desafiando el olvido, entre hambre, cólera y fallas estructurales.

II- Intervencionismo y hambre

En abril de 2014, el World Food Program –Programa Mundial Alimentario– lanzó una alerta sobre la crisis de inseguridad alimentaria de la región norte-oeste de Haití. Sin embargo, en lugar de funcionar como denuncia de las causas reales del problema o como estímulo hacia el gobierno y la comunidad internacional para que intervinieran y fomentaran la producción agrícola local, el aviso sirvió como excusa para llamar a mayores esfuerzos en las donaciones desde el exterior. Entonces, se favoreció la llegada de productos importados. Pasó lo mismo en 2010, tras el sismo que dejó 250 mil víctimas en la capital, Puerto Príncipe, así como un millón y medio de personas sin techo. Todavía hoy, 140 mil haitianos viven bajo carpas en los campos de desplazados.

“El país tiene una necesidad desesperada de alimentos y de asistencia para la nutrición”, remarcó en abril Peter de Clercq, representante de la MINUSTAH, la misión militar de Naciones Unidas para la

“estabilización de Haití”. Hace décadas que las peticiones lanzadas por alguna agencia internacional legitiman respuestas que raramente persiguen los intereses de la población de los países “asistidos”, sino más bien sirven a los objetivos de las multinacionales de la solidaridad y del comercio, de las potencias económicas y, asimismo, de las asociaciones religiosas foráneas. Pese a las “ayudas”, en los últimos cuatro años el precio del frijol, del arroz y otros alimentos creció cuarenta por ciento y se multiplicaron las protestas populares, sobre todo en el norte, en el distrito de Cabo Haitiano.

For Haiti With Love es un nombre que suena bien, aunque un poco cursi. Es una organización cristiana sin fines de lucro que sabe aprovechar las ocasiones que se abren tras cada crisis alimentaria y los pedidos de ayuda de alguna institución internacional. “Para Haití con Amor” pidió a sus simpatizantes un esfuerzo mayor en estos términos: “Tenemos que rezar verdaderamente para que más gente se interese por Haití y ayude a compartir el fardo de las ayudas allá, pero la ayuda financiera directa es lo que más necesitamos realmente justo ahora.” Así, paliando sufrimientos, tapando alguna falla con alimentos importados y oraciones, la protesta social y la inconformidad de los agricultores locales se va aliviando y los negocios pueden seguir.

El país caribeño tiene una tasa de pobreza del ochenta por ciento de la población, con un salario mínimo de 4.5 dólares al día que muchas empresas no quieren pagar. Veinte por ciento de los niños padece desnutrición, un millón y medio de personas pasa hambre y 6.7 millones tienen dificultades para cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Los programas asistenciales no han mejorado la situación y, por el contrario, han creado dependencia. La prensa mundial tiende a presentar los problemas de Haití de manera tendenciosa, extrapolándolos de su historia y del contexto neocolonial en que se engendraron, como si la pobreza endémica, la deforestación, el cólera, los daños de las catástrofes naturales y el arrebato de la soberanía hubieran sido producidos por un pueblo inconsciente o por un clima adverso.

En cambio, se minimizan las responsabilidades de gobiernos y agencias extranjeras que se reparten donaciones, programas y prebendas, y de las multinacionales que dominan la economía de la isla. Lo mismo pasa con el papel de la corrupción e ineptitud de la élite política nacional, aliada con la de las potencias más influyentes en la historia haitiana, como Francia, Estados Unidos y Canadá. Poco se habla de los despilfarros y costos logísticos de las más de 10 mil ONG presentes en Haití que, en la mayoría de los casos, constituyen más del sesenta por ciento de su presupuesto.

También la militarización de Haití es un hecho incontrovertible y poco mencionado. La comunidad internacional ha preferido invertir en misiones armadas, prácticamente desde principios de la década de los años noventa del siglo pasado, y no en el desarrollo y la democratización; baste recordar que ha habido dos golpes de Estado y miles de asesinatos políticos en los últimos veinte años en Haití. El territorio es ocupado por ejércitos extranjeros cada vez que hay alguna crisis, como sucedió después del terremoto, cuando llegaron más de 20 mil marines estadounidenses, así como centenares de soldados de otros países. Además, Haití es controlado permanentemente por una fuerza internacional, la MINUSTAH, que desarrolla tareas policíacas y militares, fuera del control del Poder Ejecutivo haitiano, que no cuenta con fuerzas armadas propias.

La injerencia de milicias foráneas se ha justificado con la presunta violencia de las ciudades haitianas y con los conflictos políticos internos que generarían inestabilidad en toda la región. En realidad, el verdadero afectado por las crisis caribeñas es Estados Unidos, donde reside cerca de un millón de haitianos y se vive con miedo la reanudación de flujos migratorios “no deseados”. Además, Haití no es un país violento: su tasa de homicidios es de siete por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio del Caribe es de diecisiete; en México dicho índice llega a veinticuatro y en Honduras alcanza noventa y uno.

Farol de la ONU

En la Asamblea de la ONU, en septiembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la intención de que México participe en las Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas que son aprobadas por el Consejo de Seguridad. Se enviarán contingentes civiles y militares para integrarse a los Cascos Azules, lo cual es una novedad para la política exterior mexicana y su tradición castrense no intervencionista. Ya hay países latinoamericanos, como Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros nueve, que mandan tropas al extranjero, bajo el control

de la ONU y, asimismo, asignan personal civil y grupos de profesionales a las misiones. Como parte de la comunidad internacional, las misiones apuntan a la creación de “cierto estatus” para los países, más allá de las presuntas “responsabilidades” o compromisos “morales” y “democráticos” que se enarbolan para justificarlas.

La estrategia para generar “prestigio” *manu militari*, aun en el ámbito de Naciones Unidas, y la política de “potencia regional mediana” estaban detrás del anuncio presidencial, junto a la aspiración de contar más en el concierto mundial y en sus instituciones, y quizás ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Hay otros países, como Noruega, Suiza o Cuba, que prefieren elevar su “estatus” sin hacer hincapié en las milicias o únicamente en los intereses de los “jugadores globales” dominantes, sino que se ganan respeto con el soft power, el poder blando, es decir negociando acuerdos de paz, intermediando en conflictos armados, ofreciendo recursos, servicios e instituciones en el exterior y generando confianza mediante su imparcialidad o capacidad negociadora. Pero no es el camino que Peña Nieto parece privilegiar.

Entre las diecisiete misiones ONU en el mundo, en México se mencionó un caso específico para arrancar: el de Haití y la MINUSTAH, ya que allí la operación es “encabezada por países latinoamericanos” y “México de manera natural tiene un lugar”, según dijo la exembajadora Olga Pellicer. Cabe destacar que la MINUSTAH está bajo el mando de Brasil y hablar, en este caso, de “misión de paz”, es un eufemismo. La Misión en el país caribeño tiene tareas de policía y militares para el control, mejor dicho “la ocupación”, del territorio.

Además de ser responsables de la epidemia de cólera que ha cobrado casi 9 mil víctimas y producido más de 750 mil contagios en cuatro años y medio, los cascos azules brasileños, latinoamericanos y de otras regiones se han manchado con crímenes y abusos a los derechos humanos desde su llegada en 2004 hasta la fecha. Por ejemplo, los perpetrados por las misiones de “pacificación” en el barrio de Cite Soleil a cañonazos, causando la muerte de decenas de inocentes, para buscar a presuntos delincuentes y a seguidores del expresidente Jean Bertrand Aristide, víctima de un golpe y deportado por militares estadounidenses en febrero de 2004. Precisamente su expulsión forzada, orquestada por la CIA y el International Republican Institute de Estados Unidos y otras potencias hegemónicas en la isla, como Francia y Canadá, justificó la entrada del ejército de la ONU en apoyo al régimen antidemocrático (2004-2006) del presidente Alexandre Boniface y su primer ministro Gérard Latortue, en el cual hubo 4 mil asesinatos políticos. Los Cascos Azules y la ONU tardaron casi tres años en reconocer su responsabilidad frente a la epidemia de cólera, y el plan de erradicación de la enfermedad costará 2.2 billones de dólares.

La MINUSTAH ha tenido tareas positivas de protección de la población tras catástrofes naturales y en momentos de conflictividad política, pero también ha actuado como fuerza extranjera de control social, al margen de las decisiones del gobierno local y al servicio de Estados Unidos, principalmente. Los mecanismos, a veces perversos, de la cooperación internacional y las misiones que desde hace más de veinte años, con nombres diferentes, han sido conducidas por la “comunidad internacional” en Haití, han tenido resultados controvertidos y dudosos, si no es que desastrosos, quitando soberanía al país y provocando constantes protestas de la población. México no ha participado en los asuntos militares y policíacos de Haití, o sea la MINUSTAH, lo cual a todas luces, hasta la fecha, ha sido una ventaja.

La industria del hambre

Las alarmas sobre crisis alimentarias acaban llenando los bolsillos de productores e intermediarios estadounidenses, de agencias gubernamentales e “independientes” que administran el flujo de alimentos y dinero. Haiti Grassroots Watch (HGW) es uno de los pocos medios que informa cabalmente sobre esta cuestión, entre otras. ¿Por qué Haití tiene hambre y este flagelo es más fuerte ahora que en los últimos cincuenta años?, pregunta en un artículo en su página web. Los representantes de la Red Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria (RENAHSSA) atribuyen al gobierno el empeoramiento de la situación, pero hace ya mucho tiempo que economistas, agrónomos y expertos diseñan proyectos y ganan licitaciones, contratos y becas para supuestamente encarar el hambre.

Los donantes dan billones de dólares en “ayudas alimentarias”, “para el desarrollo” y la “asistencia humanitaria”, y controlan programas de fomento que no tocan las causas estructurales del hambre, que son al menos seis, según HGW: 1. La pobreza, la precariedad salarial y la privatización de todos los servicios; 2. El régimen de la propiedad de la tierra, la falta de su gestión racional, la inexistencia de un registro y el uso clientelar de la tierra; 3. El neoliberalismo, que impuso aranceles bajísimos sobre los productos importados hace más de veinte años y causó éxodos del campo a las ciudades, sobrepobladas y peligrosas, como también se vio con el sismo de 2010, cuando murieron más personas en los barrios más poblados, pobres y hacinados; 4. El aumento demográfico con producción agrícola estancada, basada en técnicas obsoletas y abandonada por el Estado; 5. El impacto negativo de la “asistencia” internacional que actúa según coyunturas y emergencias, por sus propios intereses, fuera del poder del gobierno local; 6. Las ineficiencias del mercado interno, los oligopolios de los importadores de comida que mantienen altos los precios.

Según HGW, más del cincuenta por ciento de la ayuda alimentar para Haití proviene de programas gubernamentales estadounidenses. Sólo una pequeña parte pasa por el Ejecutivo haitiano, pues la mayoría es administrada por agencias como el World Food Program y contratistas como World Vision, CARE, ACDI-VOCA y Catholic Relief Service. Estas “importaciones” de bajo costo hacen competencia o dumping a la producción haitiana y generan recursos para las ONG. El gobierno de Estados Unidos compra arroz, trigo, harina, aceites, pollo y frijoles a sus productores, y luego los envía a las organizaciones que pueden revender los alimentos y obtener efectivo para sus propios proyectos. La industria del hambre es un gran negocio para el cual se crean mercados cautivos en los países receptores de la ayuda, ahogando la expansión de la agricultura local. También por ello el hambre es una plaga endémica que se relaciona con los mecanismos de la cooperación internacional y la imposición externa de políticas comerciales depredatorias.

Fuente: Fabrizio Lorusso. Rebelión

HONDURAS

"LA POLICÍA DE HONDURAS NO ES DE JUAN ORLANDO, SINO DEL PUEBLO" DICEN LÍDERES DE OPOSICIÓN

Representantes de las bancadas de oposición compuestas por líderes del Partido Liberal, Libertad y Refundación (LIBRE) y Partido Anti Corrupción (PAC), ratificaron sus posturas sobre darle rango constitucional a la Policía Militar esta mañana en un programa televisivo.

La controversia sobre el tema se ha vuelto innegociable, al menos para Mauricio Villeda representante del partido Liberal y excandidato a la presidencia; Manuel Zelaya, coordinador de LIBRE y expresidente de Honduras y Salvador Nasralla, excandidato presidencial del PAC. Ellos aseguran que esto es un "capricho" del presidente Juan Orlando Hernández.

Además, cada uno de los líderes políticos, instó a los diputados titulares a que no abandonen sus curules, y Mauricio Villeda acotó "de aquí al sábado los diputados deben comer curiles para que tengan la fuerza política para defender nuestra posición".

Según Mauricio Villeda, el gobierno encabezado por el presidente Juan Orlando Hernández ha manipulado este tema: "Lo que no quieren decir es que ratificar el rango constitucional es poner a disposición la Policía Militar a una reelección en Honduras", enfatizó.

"La Policía Militar ya cumple una función específica, y no es necesario elevarla al rango directo con el presidente; La Policía no es de Juan Orlando, sino del pueblo" agregó.

El abogado Mauricio Villeda, afirmó que ratificar el decreto al artículo 274, da facultades de tener "una Policía Militar presidencial", y por su parte el liberal y su bancada proponen que se agregue al artículo 273, en que la Policía Militar este bajo el mando de las Fuerzas Armadas, como un comando. "Esto resolvería esta controversia, sin embargo no aceptan, porque sus intenciones no son las que nos hacen creer" agregó Villeda.

Por su parte, Manuel Zelaya, coordinador del partido Libertad y Refundación, Libre, comparte la opinión de los demás integrantes de la oposición. "El presidente Juan Orlando tiene miedo que le pase lo mismo que a mí, en el 2009, él sabe que las Fuerzas Armadas no se tientan para darle golpe a un titular de presidencia, por eso quiere una fuerza que lo defienda", declaró Zelaya.

Manuel Zelaya, como diputado y como coordinador de Libre, han ratificado mediante un comunicado su posición de no dar apoyo a esta ratificación de elevar al rango constitucional la Policía Militar del Orden Público, por considerarla un distractor de los temas de interés. "Que la Policía Militar haga su trabajo, pero que no asuma funciones que no le corresponden, estamos a favor de que sigan trabajando, pero sin blindar al partido de gobierno para salvaguardar su continuismo".

Zelaya, argumentó que la verdadera policía que debería de estar aprobadas son las comunitarias, es al pueblo que debemos proteger. Salvador Nasralla, líder del PAC, explotó con sus declaraciones al afirmar que el gobierno está desviando la opinión pública con temas como estos. "Dar rango constitucional a la Policía Militar es un capricho del presidente de Honduras" comentó.

Además aseguró que Juan Orlando está intimidando a todos los sectores para no hablar de temas como Tasa de Seguridad, desfalco del IHSS, desempleo y excesiva publicidad de su gobierno. "Juan Orlando se va volver loco por estar en el gobierno, esto obedece a un mandato de su partido para tapar con una reelección la olla de corrupción que han hecho en este período", enfatizó Nasralla.

En el foro, los líderes argumentan que Juan Orlando ha tratado de intimidar a todos los sectores del país, para ratificar el rango constitucional a la Policía Militar. También concluyeron que darle rango constitucional a la Policía Militar sirve para distraer los verdaderos temas de interés del país.

El Partido Nacional, por medio de sus diputados en el Congreso de Honduras, han ratificado su posición de elevar al rango constitucional a la Policía Militar, y posteriormente llamar a un referéndum en el pueblo.

Según el artículo número dos, en su segundo párrafo, indica que: La soberanía del pueblo también ejercerse de manera directa, a través del Plebiscito y el Referendo.

Sin embargo, según abogados de Honduras, no se puede aplicar a referéndum una ley, que no este ratificado bajo decreto, este sería el paso que hace falta, para darle constitucionalmente el rango a la Policía Militar.

La ley de Policía Militar del Orden Público, vendría a ser como las fuerzas armadas, paralelas y con similares funciones, pero a diferencia de las Fuerzas Armadas, la primera si recibiría órdenes directas del titular de la presidencia de Honduras.

La ley de PMOP fue aprobada por el Congreso Nacional de Honduras en noviembre de 2014, por más de 100 diputados, para que se ratifique la ley deben obtener 86 votos, y la controversia surge allí. El reloj esta en contra para los impulsores de esta ley, ya que hasta el sábado es el plazo para ratificar o denegar la ley.

Fuente: <http://www.tiempo.hn/>

MÉXICO

ALCALDE ACUSADO POR LAS DESAPARICIONES DE ESTUDIANTES EN MÉXICO; FAMILIAS EMPRENDE BÚSQUEDA COMUNITARIA EN EQUIPOS

En "México,": fiscales federales presentaron cargos formales contra el alcalde de Iguala por el secuestro de 43 estudiantes a fines de septiembre. La policía había acusado a José Luis Abarca y su esposa de conducir el ataque, pero es la primera vez que se lo procesa por ello. Los estudiantes fueron supuestamente secuestrados por la policía local que trabajaba con bandas de narcotraficantes y según un informe, posiblemente con fuerzas federales también. Mientras tanto, los padres de los estudiantes desaparecidos emprendieron una búsqueda civil en la región de Guerrero, donde los estudiantes fueron vistos por última vez. Cientos de personas, entre las que había miembros de fuerzas policiales de la comunidad, estudiantes de Ayotzinapa y miembros de la

sociedad civil, están peinando zonas rurales en donde recibieron pistas de que los estudiantes podrían estar cautivos.

Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos que ayuda a coordinar la búsqueda, expresó: "Al menos en lo personal he ido a casi más de cien lugar a buscar a mi hijo. Entonces no lo hemos encontrado, no hemos dado con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver las cosas, pues el gobierno, el militar, es el que los tiene. Porque todo esto, todo lo que se ha dicho, pues, fue planeado por ellos mismos. Verdad desde el gobernador del estado de Guerrero, pues el gobierno definitivamente sabe, pero no nos quiere dar respuesta. A mí eso es lo que más me indigna, puedo decir, como mexicano, me da vergüenza darme cuenta, qué gobierno existe, o qué gobierno tenemos aquí en el estado de Guerrero".

PANAMÁ

CORTE IDH CONDENA A PANAMÁ POR VIOLACIONES TERRITORIALES A LOS PUEBLOS GUNA Y EMBERÁ

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el pasado 16 de diciembre una sentencia condenando al estado de Panamá por la violación del derecho a la propiedad colectiva y los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial del Pueblo Guna de Madungandí y de las Comunidades Emberá de Ipetí y Piriati.

El despojo se originó con la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona del Alto Bayano, Provincia de Panamá, en el año 1972, la cual significó la inundación de parte del territorio indígena en la zona y el desplazamiento de las comunidades que la habitaban hacia tierras alternativas.

La Corte también concluyó que "el Estado había incumplido el deber de adecuar su derecho interno por no haber dispuesto a nivel interno normas que permitan la delimitación, demarcación y titulación de tierras colectivas antes del año 2008, en perjuicio de los Guna de Mandungandí y Emberá de Bayano y sus miembros".

El lago artificial creado al represar el río Bayano, dejó sumergidos cientos de hectáreas de selva, que con el transcurso de los años ha contribuido a la emanación de metano, gas 35 veces más contaminante que el CO₂, además de conllevar a la destrucción de ecosistemas vitales.

La promoción de las hidroeléctricas como "energía limpia" se encuentra cada día más cuestionada, ante los descalabros ecológicos que han surgido en los últimos años y la existencia de posibles alternativas, las cuales quizás implican una mayor inversión económica, pero a largo plazo y teniendo en cuenta el costo ecológico de la destrucción de los ríos, pueden ser de mayor beneficio.

Las más de 500 represas hidroeléctricas promovidas por el Plan Mesoamerica han dado lugar a severos conflictos sociales, que tienden agravarse ante la inconsistencia de los estados en relación al respeto del territorio ancestral. El argumento de parte de los estados-nación es el cambio de patrón de producción de energía y de esta forma suplantando el uso de combustibles fósiles; sin embargo esta estrategia es una falacia, ya que continua entregándose a la inversión privada grandes extensiones de territorios indígenas, situación que conlleva a la inundación de miles de hectáreas de bosque, acelerando de esa forma los efectos del cambio climático.

La sentencia de la Corte IDH en relación al caso de la represa del Bayano, reitera la jurisprudencia del sistema Interamericano de Justicia en relación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

El derecho interno de la mayoría de los países latinoamericanos desconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los cuales se ven sujetos a políticas de "desarrollo" con tintes neocolonialistas.

Los reclamos planteados por los desplazados de la represa del Bayano fueron desatendidos durante décadas. Cabe recordar la represión padecida por los Gunas y Emberá, cuando 15 indígenas padecieron heridas y 97 fueron arrestados al tomarse la carretera Panamericana, exigiendo el pago de indemnizaciones y la interconexión eléctrica prometida desde los años 70.

Este es la segunda sentencia de la Corte IDH en relación a hidroeléctricas y desplazamientos de poblaciones indígenas en Centroamérica. En septiembre de 2012 la Corte emitió la sentencia en relación a las masacres de Río Negro, en la cual fallecieron más de 400 indígenas Maya Achi. Las víctimas entre 1980 al 82, superó la cifra de 5000 indígenas asesinados por el ejército de Guatemala.

Aparentemente las masacres y desplazamientos del Chixoy y el Bayano no han impedido que los estados-nación persistan en desconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas y mucho menos el derecho a la consulta, previa, libre e informada que poseemos.

Desde San Cristóbal Barillas (Guatemala), pasando por Río Blanco (Honduras) hasta Barro Blanco (Panamá), las comunidades indígenas ven como sus territorios pretenden ser utilizados para embalses. En ningún de estos casos mencionados se respetó el derecho a la consulta, y en el marco de la política del “desarrollo”, los diferentes estados nación vienen reprimiendo a las poblaciones locales, encarcelando líderes y entregando sus territorios a compañías privadas, muchas de ellas asistidas por los fondos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Fondo (MDL) de Carbono de Naciones Unidas.

Como de costumbre, sobran los señalamientos por parte de gobiernos y empresarios, en relación a la oposición de los pueblos indígenas al desarrollo y el bienestar nacional. Hasta la fecha los gestores del ecocidio sufrido en centroamericana hacen caso omiso a la grave situación por lo que atravesamos y el nefasto futuro que nos depara el cambio climático.

En un documento divulgado por la CEPAL en La COP20 efectuada en Lima el mes pasado, intitulado “La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe”, expone como en los próximos años se dará un declive en las precipitaciones en Centroamérica, dando lugar a una disminución de la producción energética y colocando en peligro el caudal ecológico de muchos de los ríos en el istmo.

La sentencia de la Corte IDH en relación al caso de la hidroeléctrica del Bayano, representa un enorme logro para los Guna y Emberá así como para los restantes pueblos indígenas de Panamá y del continente. Falta ver si existe voluntad política del estado para apegarse a la sentencia. Mientras tanto el pueblo Ngöbe-Buglé lamenta y denuncia la destrucción de Kia uno de sus lugares sagrados, el que está a punto de ser sumergido por el embalse promovido por el “hondureño” Luis Kaffie, sin que las autoridades panameñas tomen cartas en el asunto para proteger a los Buglé del acoso empresarial promovido en su contra.

Fuente: <http://alainet.org/active/>

VENEZUELA

LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

El 31 de julio de 2014 el precio del petróleo venezolano era de 96,14 dólares y el 16 de enero de 2015 es de 39,19.

Desde junio de 2014, el crudo venezolano ha perdido un 61% de su valor y, con esto, se ubica en la menor cotización en cinco años, tras los efectos de la crisis financiera de 2008.

La guerra internacional del petróleo.

La crisis del petróleo de 1974 cambió el mundo. Hacia marzo de aquel año, el precio del crudo se había cuadruplicado: el barril pasó de tres a doce dólares. Los países productores, en su mayoría de Oriente Próximo y el norte de África, se convirtieron en nuevas potencias económicas, mientras que las economías de EE UU, Europa, Japón y otros importadores sufrieron un grave revés. Las relaciones de poder entre los principales actores geopolíticos se vieron alteradas y se crearon nuevos vínculos. También provocaron guerras y contribuyeron a la propagación internacional del fundamentalismo islámico, gracias a la financiación que recibió de países que acababan de convertirse en Estados muy ricos, como Arabia Saudí y otros.

El mundo está a punto de descubrir que la considerable, repentina y absolutamente inesperada bajada actual del precio del crudo podría ser tan perturbadora como esa crisis de 1974.

Del sabotaje petrolero al 2014

Lo cierto es que en 2002-2003, cuando se produce el Golpe de Estado y el sabotaje petrolero, aconteció uno de los momentos más críticos de la macroeconomía venezolana]. Pero a pesar que el sabotaje casi paralizó la industria y redujo la exportación a mínimos históricos, el gobierno contaba con un gran apoyo popular, un entusiasmo que condujo a enfrentar este cierre de la producción y exportación de petróleo a partir del protagonismo popular y militar.

Pocos años después, a finales de 2008, Venezuela vivió otra grave situación de restricción externa situación parecida cuando los precios pasaron de 120 dólares el barril en junio a 30 dólares el barril en diciembre de dicho año

En esa ocasión, se diseñó y se llevó a cabo un ajuste, pero no un ajuste recesivo, no un ajuste neoliberal. Chávez anunció públicamente la situación, explicó las causas (la crisis capitalista mundial) y las medidas que obligaban al gobierno a hacer una más sabia disposición de los mermados recursos. No se sacrificó el gasto social y el gasto en proyectos estratégicos al mismo tiempo que se decretaron medidas de recorte del gasto suntuario en el sector público...

Si se hace una comparación con las condiciones favorables (llamémoslas fortalezas) en lo económico con que se contaba en 2008, y las de ahora, el panorama es muy diferente, mucho más sombrío...

Lo lamentable es que esta situación está siendo aprovechada por el oportunismo y la mediocridad intelectual de algunos actores, que promueven la liberalización como salida. Los esquemas de liberación del tipo de cambio en un ambiente de shock externo y restricción de la balanza de pagos, tienen alta probabilidad de agravar el problema, especialmente porque no estamos en el mundo ideal donde los grandes actores que poseen dólares son racionales.

Las recomendaciones que se hacen pueden agravar el acorralamiento del gobierno bolivariano. Algunos vienen proponiendo liberar la fijación del precio del dólar, acompañando esta opción "de mercado" con una capitulación frente al dólar paralelo.

Por otro lado, hay una estrategia dirigida por la intelectualidad económica de la derecha internacional (en la que juegan -nada líricamente- los fondos buitres) para comprar títulos públicos a precios de liquidación...

Curiosamente, a esta cínica estrategia (que replicaron oportunamente todos los economistas opositores), hay muchos dirigentes de la autocalificada izquierda bolivariana que se le han unido en la práctica y vociferan: que el gobierno no debe "pagar la deuda hasta raspar la olla".

Lo que vive hoy Venezuela son momentos graves, delicados, donde se hace necesario recurrir a la creatividad y al apoyo popular con base en la pedagogía que aprendimos con Chávez: participar, analizar y proponer. Ambas cosas desde la perspectiva revolucionaria. Hay que apoyar al presidente Nicolás Maduro, alentando no sólo la reflexión económica sino también la lectura política de la situación.

De seguir las propuestas neoliberales, no solo se hará un daño irreparable a lo que se construyera durante tres lustros, sino que se atentaría no solo contra las políticas bolivarianas de inclusión, justicia social y equidad, sino también contra los proceso de desarrollo de la cuenca caribeña basadas en el apoyo de Petrocaribe, por ejemplo. Un tsunami que no solo puede arrasarse Venezuela sino que tendrá graves repercusiones (y consecuencias) en toda la región.

Fuente: <http://questiondigital.com/?p=24963>

LA OPOSICIÓN FIRMA LA TREGUA

"Sobran razones para unirnos". El lema impreso en las paredes del plató donde se celebró la conferencia de prensa del excandidato presidencial Henrique Capriles resumía su nueva estrategia.

Después de enfrentarse durante casi todo 2014 con el ala opositora que lideró las protestas contra el Gobierno venezolano, el gobernador del Estado de Miranda deja atrás las diferencias en pos del objetivo superior de poner fin al régimen de Caracas a corto plazo...

Coincidiendo con la comparecencia de Capriles, fueron López, Machado y Ledezma quienes enviaban un comunicado en el que reivindicaban su estrategia del año pasado. “Si en 2014 la salida era urgente, en 2015 es impostergable”. La Salida fue el nombre de las protestas entre febrero y junio y que terminaron con 43 fallecidos, cientos de heridos y torturados, y miles de detenidos, pero que propinaron al régimen una derrota política. La faz represiva del oficialismo devino en las sanciones establecidas por EE UU en enero contra parte de la nomenclatura local responsable de las violaciones de los derechos humanos.

Todo ocurre en medio de un año electoral crucial para la oposición y el oficialismo. La batalla por el control de la Asamblea Nacional, cuya renovación ocurrirá probablemente en el segundo semestre, determinará cómo llega cada bando a la mitad del período presidencial.

Alfredo Meza